Inmigración alquilada, juventud castrada

Hay pocos asuntos que pueden resumir el estado de una nación. Asuntos centrales sobre los que la población puede verter sus preocupaciones, miedos y odios, y también sus deseos y esperanzas. Y no hay duda de que, en la España de hoy, el que reúne más características para serlo es la vivienda. La perspectiva de un futuro y de una vida choca con la realidad de unos salarios estancados, un empleo de baja cualificación, el aumento imparable de la inflación o el colapso de los servicios públicos. La vivienda es posiblemente el problema más multifactorial y a la vez más indicativo de la salud de las sociedades modernas, ya que su éxito o fracaso depende del propio éxito del Estado que construye su sociedad.

Sin embargo, no es exactamente esta idea la que ha captado la izquierda como catalizadora de voto para las próximas elecciones del 29 de noviembre. En tromba, usando al Sindicato de inquilinas como ariete, ha salido a preocuparse por una parte específica del asunto: los alquileres. En el fondo es natural. La idea de la vulnerabilidad que trae consigo el vivir en casa de otro conecta con los valores progresistas. Los problemas para encontrar piso, la ansiedad por un aumento en la renta o el dolor ante el desahuciado, ante el pobre excluido, es el motor de quien valora más el dolor frente a la justicia como espíritu de la legislación. Como preguntaba el CIS en su último barómetro antes de la convocatoria anticipada de elecciones: «¿Qué prioriza usted, la protección al vulnerable, o el respeto a las leyes y los contratos?». No es de extrañar que el símbolo de la reivindicación fuese una anciana de 87 años desahuciada.

El plan parece impecable, y el discurso lo contiene todo para contentar a su parroquia. Sin embargo, a tenor de lo que publican las encuestas, el sentido del voto de los españoles no está cambiando. Es pertinente entonces preguntarse si los españoles no están preocupados por la vivienda y por el alquiler, o si, por el contrario, estamos pasando algo por alto.

A decir verdad, la población propietaria en España es de las más altas de Europa. Alrededor del 77 % de los españoles posee una vivienda en propiedad, rango que aumenta hasta el 90 % en el caso de los mayores de 65 años. Las mayores cohortes poblacionales del país, así, tienen asegurado un techo, mayoritariamente pagado, en el que vivir. En torno al 60 % de los mayores de 65 años tienen, además, una segunda vivienda, que usan en sus vacaciones, tienen en su pueblo natal o alquilan a ese 20 % de la población que vive de alquiler. Podríamos argüir entonces que la izquierda busca la comprensión de los mayores en defensa de los alquileres de sus nietos, pero la realidad también es tozuda aquí. El decreto que el Gobierno ha presentado considera a las sociedades patrimoniales e incluso al pequeño casero como parte del problema del alquiler, y lo criminaliza en el texto y en sus declaraciones.

Pero centrémonos en ese problema. ¿A quién afecta el alquiler? ¿Qué segmentos de la población viven de alquiler? Ya sabemos que los jóvenes son los más afectados por este fenómeno, pero indaguemos más. Aunque formalmente el 20 % de la población se considera que vive de alquiler, eso no significa que el 20 % de los españoles lo hagan. Según el Idescat -el INE catalán-, en un gráfico recogido por el doctor en economía Bernat Mallén, se recoge que, de los 2,3 millones de personas que viven en Cataluña de alquiler, apenas un 28 % son catalanes autóctonos, mientras que el 52 % son extranjeros de fuera de la UE. Así, los inquilinos extranjeros en la comunidad autónoma se han duplicado en una década, mientras que los catalanes alquilados se han reducido en ese tiempo en un 9 %. Este dato, atribuible también a Madrid y al resto de grandes ciudades de España, nos deja entrever una realidad. Los españoles no buscan alquilar, sino que son los extranjeros quienes están copando ese mercado.

Sabiendo que son los estratos de adultos jóvenes los que menos vivienda en propiedad poseen, ¿dónde viven los jóvenes españoles entonces? La respuesta es contundente: en casa de sus padres o de algún otro familiar. El lar familiar se ha convertido en el refugio de quienes ahorran unos ingresos menguantes, de una inflación que castiga a quien no gasta y

de un sistema que asfixia sus oportunidades. Y por encima de todo, se ha convertido en la última esperanza para lograr la propiedad, algún día, de un hogar propio.

Ese ideal de libertad y de autonomía no ha desaparecido de la sociología española. Es quizá, el elemento más característico de un pueblo que, en todo lo demás, ha ido cediendo espacio a la intervención del Estado. Es lo que la generación crecida en el *baby boom* ha legado como valor moral, de seguridad y de futuro. Y mientras ese ideal se siga buscando, los votos no van a ir hacia quien ataca la propiedad o priorice al recién llegado antes que a su familiar propietario o casero. La empatía y la razón del ciudadano estarán con aquellos que defiendan los valores con los que ha crecido, y con los que se vive diariamente.

Hoy, para el español promedio, joven o no, el drama no es sólo el alquiler. Es el ahorro de una entrada o la ayuda a un familiar que quiere hacerlo. Quizá, en unas décadas, una nueva clase de nacionalizados inquilinos tenga poder en España como para que la activación de su voto cambie el resultado electoral. Quizá los valores del español promedio cambien, y sus intereses con ello. Mientras tanto, la realidad parece mostrarnos que el alquiler no parece hoy que mueva un voto. Lo mueve la propiedad.